



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 01201-2013-PA/TC

LIMA

LAURA YOLANDA FLORES DÍAZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 28 días del mes de noviembre de 2013, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Vergara Gotelli, Calle Hayen y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Laura Yolanda Flores Díaz contra la sentencia de fojas 747, su fecha 24 de enero de 2013, expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 11 de octubre de 2010 la recurrente interpone demanda de amparo contra el Comité de Administración de los Recursos para Capacitación (Carec), solicitando que se declare inaplicable la carta de despido del 3 de setiembre de 2010 y se ordene su reposición en su puesto de trabajo, por haberse vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad ante la ley, a la integridad moral, psíquica y física, al desarrollo y bienestar como persona, y los principios de legalidad y de irrenunciabilidad de derechos. Manifiesta que comenzó a laborar en la mencionada entidad a partir del 1 de setiembre de 2007 en virtud de contrato temporal y que desde el 31 de diciembre de 2007 fue contratada a plazo indeterminado, habiendo laborado hasta el 3 de setiembre de 2010, fecha en que fue despedida sin causa justa. Sostiene que la carta de despido no ha expresado las razones por las cuales se le retiró la confianza y que nunca se le informó de que ejercería un cargo de personal directivo. Por otro lado señala que fue obligada a recibir el cheque por concepto de indemnización por despido, pero que a la fecha no lo ha cobrado.

El apoderado de la emplazada contesta la demanda señalando que la recurrente fue contratada como asistente administrativo que es un cargo de confianza, siendo sus funciones las de reportar directamente a la Secretaría Ejecutiva y que, por ello, tuvo acceso a información reservada y confidencial de la institución. Agrega que el comportamiento negativo de la demandante no creaba un buen clima laboral. Por otro lado, refiere que la accionante ha recibido el cheque por indemnización por despido, lo que debe ser entendido como aceptación del pago y que, por tanto, debe rechazarse la demanda.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	
OTDA	
FOJAS	3 17



EXP. N.º 01201-2013-PA/TC

LIMA

LAURA YOLANDA FLORES DÍAZ

El Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 2 de mayo de 2012, declaró fundada la demanda estimando que las labores de la actora no son propias de un trabajador de confianza que haya coadyuvado en la toma de las decisiones institucionales. La Sala revisora reformando la apelada declaró infundada la demanda por considerar que la accionante ha realizado actividades que coinciden con las funciones asignadas al responsable del área de Capacitación, con lo cual el retiro de la confianza constituye una situación especial que extingue la relación de trabajo.

Mediante recurso de agravio constitucional la demandante reitera los argumentos expresados en su demanda.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

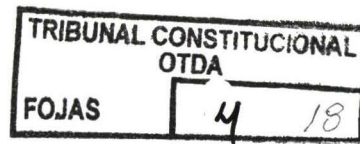
1. El objeto de la demanda es que se ordene la reincorporación de la demandante en el puesto de trabajo que venía desempeñando por haber sido víctima de un despido incausado. Alega que se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad ante la ley, a la integridad moral, psíquica y física, al desarrollo y bienestar como persona, y los principios de legalidad y de irrenunciabilidad de derechos

Consideraciones previas

2. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a la materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante este Tribunal considera que en el presente caso corresponde evaluar si la recurrente ha sido objeto de un despido incausado conforme señala en su demanda.
3. Debe señalarse que la demandante no ha efectuado el cobro del cheque N.º 64674180 (fojas 11), mediante el cual la Sociedad emplazada le abonó su liquidación por concepto de indemnización por despido arbitrario. Por esta razón, puede concluirse que la demandante no ha aceptado como forma de tutela de su derecho al trabajo la reparación económica que le ofreció la emplazada, por lo que en aplicación del precedente vinculante recaído en la STC 03052-2009-PA/TC, este Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo de la controversia.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 01201-2013-PA/TC

LIMA

LAURA YOLANDA FLORES DÍAZ

Sobre la afectación del derecho al trabajo

Argumentos de la parte demandante

4. La demandante señala que comenzó a laborar a partir del 1 de setiembre de 2007 en la entidad emplazada en virtud de un contrato temporal y que desde el 31 de diciembre de 2007 fue contratada a plazo indeterminado, habiendo laborado hasta el 3 de setiembre de 2010, fecha en que fue despedida incausadamente. Sostiene que la carta de despido no ha expresado las razones por las cuales se le retiró la confianza y que nunca se le informó de que ejercería un cargo de personal directivo.

Por otro lado refiere que fue obligada a recibir el cheque por concepto de indemnización por despido, pero que a la fecha no lo ha cobrado.

Argumentos de la parte demandada

5. La demandada sostiene que la recurrente fue contratada como asistente administrativo, cargo de confianza, siendo sus funciones las de reportar directamente a la Secretaría Ejecutiva y que, por ello, tuvo acceso a información reservada y confidencial de la institución. Agrega que la demandante tenía un comportamiento negativo, por lo que no creaba un buen clima laboral. Por otro lado, refiere que la accionante ha recibido el cheque por indemnización por despido, lo que debe ser entendido como aceptación del pago y que, por tanto, debe rechazarse la demanda.

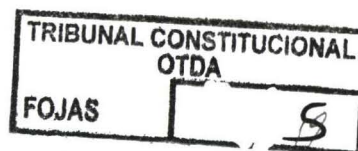
Consideraciones del Tribunal Constitucional

6. El artículo 22.º de la Constitución Política del Perú establece que: “El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y medio de realización de una persona”. Mientras que el artículo 27.º de la carta magna señala que: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”.

Cabe resaltar que el contenido esencial del derecho al trabajo implica dos aspectos: El de acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por la otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa. En el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo; si bien hay que precisar que la satisfacción de este aspecto implica un desarrollo progresivo y según las



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 01201-2013-PA/TC

LIMA

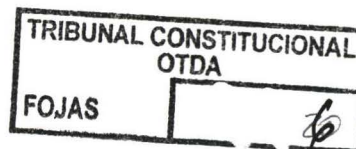
LAURA YOLANDA FLORES DÍAZ

posibilidades económicas del Estado. El segundo aspecto trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de ser despedido salvo por causa justa.

7. En el presente caso debe determinarse si las funciones asignadas a la demandante eran propias de un trabajador de confianza, puesto que de ser el caso, la demandada estaba autorizada para extinguir el vínculo laboral por retiro de la confianza o si, según fuera el caso, correspondía que la demandante retornara a las funciones comunes u ordinarias que desempeñaba antes de haber sido promovida.
8. De acuerdo con lo previsto en el artículo 43.º, segundo párrafo del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, son trabajadores de confianza aquellos que laboran en contacto personal y directo con el empleador o con el personal de dirección, teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o profesionales y, en general, a información de carácter reservado, y cuyas opiniones o informes son presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la formación de las decisiones empresariales.
9. En la STC N.º 03501-2006-PA/TC, fundamento 16, este Colegiado ha señalado que: “la calificación de dirección o de confianza es una formalidad que debe observar el empleador. Su inobservancia no enerva dicha condición si de la prueba actuada esta se acredita. Por lo que **si un trabajador desde el inicio de sus labores conoce de su calidad de personal de confianza o dirección, o por el hecho de realizar labores que implique tal calificación, estará sujeto a la confianza del empleador para su estabilidad en su empleo**, de lo contrario solo cabría la indemnización o el retiro de la confianza depositada en él” (resaltado agregado).
10. En el fundamento 13 de la misma sentencia se ha precisado también que “la mayor diferencia existente entre ambas categorías de trabajadores [personal de dirección y personal de confianza] radica en que sólo el personal de dirección tiene poder de decisión y actúa en representación del empleador, con poderes propios de él. **En cambio, el personal de confianza, si bien trabaja en contacto directo con el empleador o con el personal de dirección, y tiene acceso a información confidencial, únicamente coadyuva a la toma de decisiones por parte del empleador o del referido personal de dirección, son sus colaboradores directos**” (resaltado agregado).
11. De la liquidación de beneficios sociales de fojas 9, se aprecia que la demandante inició sus labores el 1 de setiembre de 2007 y que se desempeñó como asistente



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 01201-2013-PA/TC

LIMA

LAURA YOLANDA FLORES DÍAZ

administrativo hasta el 6 de setiembre de 2010, fecha en que fue cesada por motivo de retiro de la confianza. De los contratos de trabajo de fojas 3 y 5, se verifica también que la demandante fue primero contratada a plazo determinado y que a partir del 31 de diciembre de 2007 fue contratada como trabajadora a plazo indeterminado en calidad de personal de dirección, aunque es de precisar que esta calificación se realizó en forma general sin precisarse el cargo y las funciones específicas a realizar, lo que en principio constituye una irregularidad formal.

12. La demandante ha negado que sus funciones sean las de un trabajador de dirección o de confianza. En el transcurso del proceso ha afirmado que no representaba a la empresa y que sus decisiones no surtían efectos en los demás trabajadores o en el rumbo de la institución, sino que fue contratada solo para desempeñar funciones administrativas en el Área de Capacitación, que implicaban labores operativas e internas, sin responsabilidades mayores.
13. A fojas 104 obra el Manual de Organización y Funciones, aprobado el 5 de agosto de 2005, donde se aprecia que la demandada es una organización dedicada a las actividades de transferencia de tecnología y capacitación del personal del subsector hidrocarburos que designe el Ministro de Energía y Minas. Está estructurada en dos órganos de alta dirección: Comité Directivo (presidente y miembros) y Secretaría Ejecutiva; un órgano de asesoría: Área de Asesoría Jurídica; y, cuatro órganos de línea: Áreas de Capacitación, Administración, Contabilidad y Tesorería.
14. En cuanto al Área de Capacitación, el mismo documento refiere que está a cargo de un coordinador que se encarga de reportar ante la Secretaría Ejecutiva. Entre sus funciones básicas cabe mencionar la coordinación, organización y supervisión de auspicios de actividades de capacitación; verificar que las actividades de capacitación cumplan con las políticas de la institución y formular y proponer el presupuesto de las actividades de capacitación. Asimismo, destacan para el presente caso las siguientes "funciones específicas": coordinar e invitar a instituciones nacionales y extranjeras para que presenten sus cotizaciones y propuestas académicas de actividades técnicas; realizar el seguimiento y la confirmación con los coordinadores de las diferentes empresas e instituciones de la participación de los profesionales para asistir a los cursos; coordinar con la institución seleccionada para el dictado de los programas de extensión profesional, diplomados y otros estudios, etc.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	
OTDA	
FOJAS	71



EXP. N.º 01201-2013-PA/TC

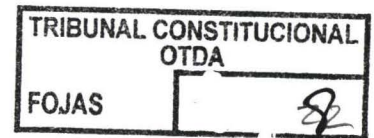
LIMA

LAURA YOLANDA FLORES DÍAZ

15. De la documentación adjuntada de fojas 262 a 658 sobre autorizaciones de pago, facturas, correos electrónicos, oficios, correspondiente a los años 2008 y 2009, se desprende que las actividades de la demandante se identifican con las funciones de coordinador reseñadas en el fundamento precedente. En efecto, de ella se aprecia que la demandante coordinaba la participación de los expositores nacionales y extranjeros y se encargaba en general de la realización de los cursos de capacitación de la emplazada. Para ello, actuaba ante terceros como encargada de la demandada y, con la aprobación de la Secretaría Ejecutiva, autorizaba pagos de diversa índole para la ejecución de los mismos, como pasajes aéreos, gastos de hospedaje, alimentación de los expositores; coordinaba con los distintos hoteles la realización de los eventos; alquilaba equipos multimedia, contrataba servicios de traducción simultánea, etc.
16. De ello se concluye que la demandante desempeñaba funciones que son propias de un trabajador de confianza y que no realizaba meras labores administrativas como se afirmaba, sino que, por el contrario, trabajaba directamente con la Secretaría Ejecutiva, órgano de dirección cuyas decisiones eran comprometidas por el grado de responsabilidad de la demandante en sus labores de organización de los cursos de capacitación y en la contratación de los distintos servicios para tal efecto, actividades que, además, cabe resaltar, eran el objeto social principal de la emplazada. Por lo tanto, la carta de fojas 7, de fecha 3 de setiembre de 2010, que resuelve retirar la confianza a la actora no constituye una afectación a su derecho al trabajo.
17. Ahora bien, también este Tribunal en la STC N.º 3501-2006-PA/TC, fundamento 11.f), ha enfatizado que **“El retiro de la confianza comporta la pérdida de su empleo, siempre que desde el principio de sus labores este trabajador haya ejercido un cargo de confianza o de dirección, pues de no ser así, y al haber realizado labores comunes u ordinarias y luego ser promocionado a este nivel, tendría que regresar a realizar sus labores habituales, en salvaguarda de que no se produzca un abuso del derecho (artículo 103.º de la Constitución), salvo que se haya configurado una causal objetiva de despido indicada por ley”** (resaltado agregado).
18. De otro lado a fojas 3 obra el contrato de trabajo a plazo determinado cuya duración estaba estipulado desde el 1 de setiembre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007, mediante el cual se contrató a la demandante para que “realice labores administrativas, cubriendo de esta manera las actividades propias internas del CAREC” (cláusula tercera).



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 01201-2013-PA/TC

LIMA

LAURA YOLANDA FLORES DÍAZ

19. Al respecto el artículo 72.º del Decreto Supremo 003-97-TR establece los requisitos formales de validez de los contratos modales, estableciendo que los mismos “necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral”.
20. Por su parte el artículo 77.º del decreto precitado establece que “Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada: d) Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley”.
21. Del examen del contrato temporal de fojas 3 debe concluirse que la parte emplazada no ha cumplido con su obligación de precisar la causa objetiva que justifique la contratación a plazo determinado de la demandante, ni tampoco ha señalado la modalidad contractual ni las condiciones de contratación, en particular, las funciones específicas y el cargo que iba a desempeñar la demandante, indicándose únicamente, y en forma genérica, que realizaría “labores administrativas”; por dicha razón, el contrato de trabajo se desnaturalizó y por ende debe considerarse un contrato de trabajo a plazo indeterminado, en aplicación del artículo 77.d) del Decreto Supremo N.º 003-97-TR.
22. En ese sentido siendo que al 31 de diciembre de 2007 (fecha del segundo contrato, cfr. Fundamento 11) la demandante era una trabajadora a plazo indeterminado, que había adquirido protección contra el despido arbitrario de conformidad con el artículo 10.º del Decreto Supremo 003-97-TR; sucedido el retiro de la confianza en el cargo de coordinadora del Área de Capacitación, debió retornar a las actividades comunes y ordinarias que asumió cuando ingresó en la institución demandada, lo que no ocurrió; por consecuencia, habiéndose despedido a la demandante sin que se exprese una causa justa relacionada con su conducta o capacidad, procede la reposición como finalidad eminentemente restitutoria de todo proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales, por haberse vulnerado el derecho al trabajo reconocido en el artículo 22.º de la Constitución.

Efectos de la presente Sentencia

23. En la medida en que en este caso se ha acreditado que la emplazada ha vulnerado el derecho constitucional al trabajo corresponde ordenar la reposición de la



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 01201-2013-PA/TC

LIMA

LAURA YOLANDA FLORES DÍAZ

demandante como trabajadora a plazo indeterminado en el cargo desempeñado cuando ingresó en la entidad demandada o en otro de similar categoría o nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución imponga las medidas coercitivas previstas en los artículos 22.º y 59.º del Código Procesal Constitucional.

24. Asimismo de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional la emplazada debe asumir los costos y costas procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia.

Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar **FUNDADA** la demanda por haberse acreditado la afectación del derecho al trabajo; en consecuencia, **NULO** el despido de que ha sido objeto la demandante.
2. **ORDENAR** que el Comité de Administración de los Recursos para Capacitación (Carec) reponga a doña Laura Yolanda Flores Díaz como trabajadora a plazo indeterminado en el mismo puesto de trabajo en que fue contratada cuando ingresó en la entidad demandada o en otro de igual o similar nivel, conforme al fundamento 22 supra, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22.º y 59.º del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos y costas procesales.

Publíquese y notifíquese.

SS.

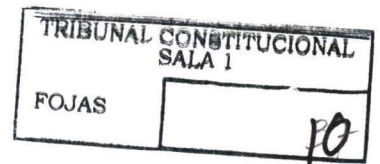
VERGARA GOTELLI
CALLE HAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA

Lo que certifico:

OSCAR DÍAZ MUÑOZ
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 01201-2013-PA/TC

LIMA

LAURA YOLANDA FLORES DÍAZ

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 1 de setiembre de 2014

VISTO

El pedido de aclaración presentado por el Comité de Administración de los Recursos para Capacitación (Carec) contra la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2013, que declaró fundada la demanda de amparo de autos; y,

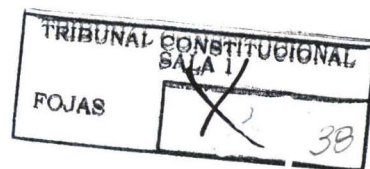
ATENDIENDO A

1. Que, de acuerdo con el artículo 121.º del Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido.
2. Que el presente pedido de aclaración se refiere a que no se valoró que la demandante había aceptado el pago de la indemnización por concepto de despido arbitrario, hecho por el cual, en aplicación del precedente recaído en la STC 03052-2009-PA/TC, debió entenderse como consentimiento del despido y, por tanto, la extinción de la relación laboral.
3. Que se advierte que la controversia que plantea el recurrente fue oportunamente merituada y explicada en el fundamento 3 de la sentencia de autos, por lo que no procede su revisión. Este Tribunal considera que lo que se pide en aclaración, en realidad, tiene como finalidad un reexamen del fondo de la sentencia emitida y la reconsideración del fallo, lo cual contradice el carácter inimpugnable de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, por lo que tal solicitud debe desestimarse.
4. Que adicionalmente, debe tenerse presente que, conforme al inciso 2, del artículo 139.º de la Constitución Política del Perú, ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada ni retardar su ejecución.

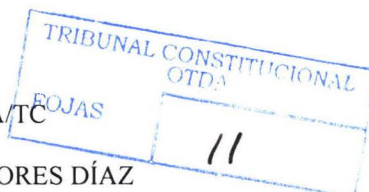
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 01201-2013-PA/TC
LIMA
LAURA YOLANDA FLORES DÍAZ



RESUELVE

Declarar **IMPROCEDENTE** el pedido de aclaración.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

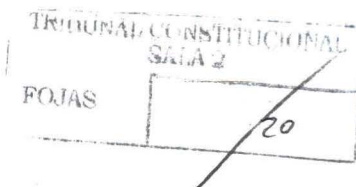
[Handwritten signature: Espinosa Saldaña]

-o que certifico:

OSCAR DÍAZ MUÑOZ
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 01202-2013-PHC/TC
MOQUEGUA
PABLO TOMÁS TALA TORRES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 4 de abril de 2014

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Tomás Tala Torres contra la resolución expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Moquegua – Mariscal Nieto, de fojas 215, su fecha 30 de enero de 2013, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 20 de diciembre de 2012, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Sala Superior de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, solicitando que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 23 de noviembre de 2012, así como su confirmatoria por Resolución de fecha 12 de diciembre de 2012, a través de las cuales se declaró infundado el pedido de cesación de su prisión preventiva; y que, en consecuencia, se disponga su inmediata libertad y la emisión de una nueva resolución que resuelva el referido pedido de cesación, en el proceso penal que se sigue en su contra por el delito de peculado doloso (Expediente N° 00094-2012-77-2801-JR-PE-02). Alega la afectación de los derechos al plazo razonable de la prisión preventiva, a la presunción de inocencia y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, entre otros.

Al respecto, afirma que respecto a la institución de la cesación preventiva, el órgano judicial ha realizado una interpretación que se encuentra fuera de lo establecido por la norma procesal, puesto que argumenta para que su persona acceda a dicha cesación tendrían que haber desaparecido los primigenios elementos de convicción, lo cual no constituye una condición normativa y resulta equivalente a exigir la plena demostración de su inocencia. Aduce que no se valoró el estatus de la prisión preventiva, no se evaluó la contundencia de las pericias y que han disminuido considerablemente los primigenios presupuestos de la prisión preventiva, por lo que la variación de la prisión resulta asequible.

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. Todo ello implica que para que proceda el